

INE/CG414/2021

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL FEDERAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP-8/2021**

## **ANTECEDENTES**

**I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución.** El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG643/2020** y la Resolución **INE/CG644/2020** respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción Nacional correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve.

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con lo anterior, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, el Partido Acción Nacional, presentó recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación<sup>1</sup> para controvertir la parte conducente del Dictamen y la Resolución **INE/CG644/2020**, mismo que recayó bajo el número de expediente SUP-RAP-14/2021.

**III. Acuerdo de escisión y remisión a la Sala Regional.** El veinte de enero de dos mil veintiuno, el pleno de la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-14/2021, escindió la demanda y ordenó remitir una porción a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal con sede en la Ciudad de México<sup>2</sup> para que resolviera exclusivamente lo concerniente a su ámbito de competencia, esto es, lo referente a la Ciudad de México y Puebla.

---

<sup>1</sup> En adelante, Sala Superior.

<sup>2</sup> En adelante, Sala Ciudad de México.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

**IV. Recepción y turno.** En consecuencia, recibidas las constancias correspondientes, se integró el expediente con la clave SCM-RAP-8/2021 y se turnó a la ponencia a cargo de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

**V. Sentencia.** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Ciudad de México resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el tres de marzo de dos mil veintiuno, determinando en su Resolutivo **ÚNICO**, lo que a continuación se transcribe:

***“ÚNICO. Revocar parcialmente la resolución impugnada, para los efectos precisados en la última de las razones y fundamentos de esta sentencia.”***

**VI.** Toda vez que en la ejecutoria recaída al recurso de apelación **SCM-RAP-8-2021** se ordenó a este Consejo General reponer el procedimiento respecto a la conclusión **1-C10-CM**, donde se otorgue la garantía de audiencia correspondiente al Partido Acción Nacional y se emita una nueva resolución en que, de ser el caso, la conducta observada, sea congruente con la sanción impuesta, asimismo, se ordenó reponer el procedimiento de acuerdo a los artículos 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización, respecto a la conclusión **1-C2-PB**, otorgando la garantía de audiencia correspondiente, y de igual forma se emitiera una nueva resolución en que de manera fundada y motivada se determine si el gasto reportado por el sujeto obligado, estuvo sobrevaluado y en su caso, se establezca la sanción que corresponda.

En este entendido, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

**C O N S I D E R A N D O**

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, inciso j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las

infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la respecto de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve.

2. Que el tres de marzo de dos mil veintiuno, la Sala Ciudad de México resolvió revocar parcialmente la Resolución **INE/CG644/2020**, en lo que fue materia de impugnación (conclusiones **1-C10-CM** y **1-C2-PB**), por lo que se procede a la modificación respectiva, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Que, de la sección **QUINTA** dentro del apartado de razones y fundamentos, en el punto **5.2** relativo al estudio de fondo, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

**QUINTA. Estudio de fondo**

...

**5.2. Análisis de fondo**

...

**Conclusión 1-C10-CM<sub>3</sub>**

*En esta conclusión el Consejo General del INE sancionó al PAN porque presentó un cheque en conciliaciones bancarias con antigüedad mayor a 1 (un) año por un importe de \$16,820.00 (dieciséis mil ochocientos veinte pesos).*

*Contra dicha conclusión, el Partido señala, entre otros agravios, que al sancionarlo, la autoridad responsable debió advertir que por las circunstancias del caso -omisión de llevar a cabo las gestiones necesarias para que la persona proveedora cobrara el cheque- resultaba inverosímil que la libertad de actuar del Partido se viera afectada o que la persona proveedora hubiera tenido la intención de realizar una aportación indebida para presionar al Partido a adoptar o dejar de adoptar una postura sobre un tema.*

*Este agravio resulta sustancialmente **fundado** y suficiente para revocar esta conclusión, por lo siguiente.*

---

**3** Visible a partir de la página 38 de la demanda.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

*En la observación del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/9578/2020 (primera vuelta), la UTF estableció que de la revisión a las conciliaciones bancarias, se detectaron partidas en conciliación que al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve) presentaban una antigüedad mayor a 1 (un) año.*

*En respuesta a dicho oficio, el PAN manifestó que adjuntaba en el SIF la documentación que justificaba las gestiones efectuadas para su regularización.*

*Posteriormente, en la observación del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/10544/2020 (segunda vuelta), la UTF indicó que respecto de los cheques, el PAN manifestó que los había expedido para cumplir las obligaciones pactadas con los prestadores de servicios señalados; sin embargo, desconocía el motivo por el cual, a la fecha de elaboración del oficio de errores y omisiones no se habían cobrado. La UTF consideró que el PAN omitió presentar la documentación que justificara las gestiones efectuadas para su cobro.*

*En respuesta, el Partido indicó que presentaba en el SIF el oficio dirigido a Omar Lozano Torres, respecto de la gestión correspondiente para la regularización del saldo.*

*Considerando la respuesta, en el Dictamen se indicó que el PAN omitió presentar la documentación que justificara las gestiones efectuadas para cobrar el cheque emitido el 7 (siete) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete) por \$16,820.00 (dieciséis mil ochocientos veinte pesos) por lo que consideró que la observación no quedó atendida.*

*Por su parte, en la conclusión **1-C10-CM** de la resolución impugnada, se consideró que el PAN presentó ese cheque en conciliaciones bancarias con antigüedad mayor a 1 (un) año, sin que se hubiera cobrado en el ejercicio sujeto a revisión o en el ejercicio posterior, y sin realizar las diligencias pertinentes para su regularización, por lo que no se acreditaba el cumplimiento del pago de pasivos en términos de los artículos 25.1 i), con relación al 54.1 de la Ley de Partidos.*

*De lo anterior, se advierte que la sanción impuesta al PAN se sustentó en que no realizó las gestiones necesarias para que se cobrara el cheque con que pagó una prestación de servicios en el ejercicio sujeto a revisión o en el ejercicio posterior.*

*Así, puede observarse que la sanción no fue congruente con las observaciones que se realizaron al Partido en los oficios de errores y omisiones, pues no se*

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

*sustentó -como tal- en la presentación tardía de la documentación soporte, su adecuado registro contable o el costo y otorgamiento de la prestación de servicios, sino en la omisión de acreditar gestiones para que una tercera persona que prestó servicios al Partido cobrara el cheque con que el PAN le había pagado.*

*Ahora bien, lo **fundado** del agravio radica en que incorrectamente el Consejo General del INE consideró que el PAN era responsable de que la persona proveedora no hubiera cobrado el cheque, al considerar que el Partido no realizó las gestiones necesarias para tal efecto, pero lo sancionó conforme a los artículos 25.1 i), con relación al 54.1 de la Ley de Partidos, que se refieren a la recepción de aportaciones por entes prohibidos.*

*Así, esta Sala Regional considera que la **conducta imputada** al PAN en los oficios de errores y omisiones (no realizar las gestiones para que la persona proveedora cobrara el cheque) no corresponde a la sancionada en los artículos 25.1 i), con relación al 54.1 de la Ley de Partidos, pues éstos se refieren a la recepción de aportaciones por entes prohibidos y no a supuestas deficiencias en el registro contable de cheques en conciliaciones bancarias de más de un año, pues la conducta originalmente observada se sustentó en la falta de gestiones de cobro del cheque y no en la presentación tardía de la documentación soporte, su adecuado registro contable o el costo y otorgamiento de la prestación de servicios.*

*Lo anterior, pues una infracción derivada de conciliaciones bancarias por presentar saldos de pasivos con antigüedad mayor a 1 (un) año que no han sido cobradas por la persona acreedora o por la prestadora de servicios no es igual a la infracción que se puede cometer por recibir aportaciones de entes prohibidos, pues en la primera, la conducta está relacionada con la permanencia de un saldo en el banco que dice el Partido que debe (pasivo) mientras que la otra, es por no rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos.*

*No se desconoce que una de las posibles consecuencias de la falta originalmente observada al Partido (falta de gestiones para el cobro de un cheque y las deficiencias en el registro contable de cheques en conciliaciones bancarias de más de un año), podría ser que, ante la omisión del cobro del cheque por parte del proveedor, la autoridad advirtiera la actualización de una falta diversa, como la prevista en los artículos 25.1 i), con relación al 54.1 de la Ley de Partidos, no obstante para poder sancionarlo de esa conducta distinta a la observada, debió realizar el procedimiento respectivo y otorgarle la garantía de audiencia al PAN, señalando expresamente esa posible conclusión.*

*Por ello, para que el Consejo General del INE determinara la sanción respecto a recibir recursos de entes prohibidos, la UTF debió -en el procedimiento de fiscalización y mediante los oficios de errores y omisiones-, señalar al Partido que las irregularidades detectadas en el registro bancario, podrían dar lugar a que fuera sancionado por una conducta diversa, pues solo así era posible que el PAN pudiera manifestar lo que a su derecho conviniera y aportar las pruebas que considerara pertinentes para desvirtuar esa aparente irregularidad.*

*Así, esta Sala Regional considera que el Consejo General del INE incurrió en una incongruencia en la resolución impugnada pues sancionó al PAN por recibir recursos de ente prohibido, pero durante el procedimiento de fiscalización sustentó tal irregularidad en que el Partido no realizó las gestiones necesarias para que una empresa acreedora cobrara un cheque que en su momento le había entregado el PAN, por lo que esta sanción deberá revocarse para los efectos precisados más adelante.*

*(...)*

#### **Conclusión 1-C2-PB<sup>4</sup>**

*En esta conclusión, el Consejo General del INE sancionó al PAN porque reportó egresos de forma sobrevaluada por un importe de \$2'389,755.00, (dos millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos).*

*Contra esa conclusión, el PAN señala, entre otros agravios, que el Consejo General del INE no fue exhaustivo al considerar el supuesto gasto sobrevaluado, pues no presentó elementos probatorios suficientes que demostraran ese sobre costo, toda vez que sus comparativos de costos los realizó con base al monitoreo en internet de propiedades similares, sin tomar en cuenta las características propias de cada inmueble y sin presentar la valuación de un perito.*

*Para esta Sala Regional el agravio es **fundado** y suficiente para revocar esta conclusión.*

*En la observación del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/9974/2020 (primera vuelta), la UTF estableció que de la documentación presentada en el SIF, observó una operación por la adquisición de bienes, que se encontraba en el supuesto de un gasto sobrevaluado, pues localizó precios a un costo menor al reportado, como detalló en el cuadro siguiente:*

---

<sup>4</sup> Visible a partir de la página 127 de la demanda

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

<b>Referencia contable</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Valuación presentada</b>	<b>Diferencia</b>	<b>Porcentaje de diferencia</b>
EGR 74-032020	registro de adquisición de inmueble para Comité Municipal de Puebla	\$5,200,000.00 (cinco millones doscientos mil pesos)	\$2,810,245.00 (dos millones ochocientos diez mil doscientos cuarenta y cinco pesos)	\$ 2,389,755.00 (dos millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos)	85.04% (ochenta punto cero cuatro por ciento)

Lo anterior, se desprende del análisis comparativo de los avalúos presentados en el expediente de escrituras y operaciones de compraventa, como indicó en el cuadro siguiente:

<b>Fecha de Avalúo</b>	<b>Perito Valuador</b>	<b>Avalúo (valor comercial)</b>	<b>Importe de la operación de compraventa</b>	<b>Diferencia entre avalúo y operación</b>	<b>Porcentaje de diferencia</b>
23 (veintitrés) de enero de 2017 (dos mil diecisiete)	M. en V. Patricia Coronado Olea Ced. Prof. 492472 Registro ICEP IC088/2017	\$1,011,551.00 (un millón once mil quinientos cincuenta y uno pesos)	\$1,215,010.00 (un millón doscientos quince mil diez pesos)	\$203,459.00 (doscientos tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos)	20.11% (veinte punto once por ciento)
11 (once) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve)	M. en V. Patricia Coronado Olea Ced. Prof. 492472 Registro ICEP IC088/2019	\$2,810,245.00 (dos millones ochocientos diez mil doscientos cuarenta y cinco pesos)	\$5,200,000.00 (cinco millones doscientos mil pesos)	\$2,389,755.00 (dos millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos)	85.04% (ochenta y cinco punto cero cuatro por ciento)

Además, la UTF mencionó que realizó una investigación de mercado sobre propiedades de iguales o similares características al inmueble observado, en la misma zona geográfica, identificando diversas cotizaciones.

En ese sentido, en respuesta al oficio de errores y omisiones (primera vuelta) el PAN señaló que la diferencia entre los 2 (dos) avalúos catastrales presentados por la perita valuadora es porque el primero se realizó el 23 (veintitrés) de enero de 2017 (dos mil diecisiete) y el segundo el 11 (once) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve) considerando el tiempo y las mejoras realizadas al inmueble conforme se estableció en la escritura.

Además, sobre el monto pagado por el inmueble señaló que en la cláusula tercera de la escritura se estableció que el precio fijado por la compraventa era justo y real al valor del inmueble, sin que hubiera lesión, dolo, error o mala fe.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

*Aunado a ello, mencionó que era importante considerar que el valor de la propiedad fue aceptado por las partes atendiendo al tipo de bien, sus condiciones de uso y beneficio, área geográfica, bienes y servicios que ofrece, y modernizaciones constantes de la zona, pues el inmueble está ubicado en una avenida principal con concreto hidráulico en la que circula la línea 2 (dos) de la red urbana de transporte articulado, frente a un reconocido club de golf, cerca de plazas comerciales y de colegios particulares que aumentan el valor del inmueble.*

*Por otra parte, señaló que del análisis de mercado que realizó la UTF era posible advertir que comparó propiedades con un valor más bajo correspondientes a casas-habitaciones y no a inmuebles comerciales y que no tienen tenían la misma ubicación del inmueble adquirido.*

*Posteriormente, en la observación del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/10891/2020 (segunda vuelta), la UTF indicó que la Ley de Catastro del Estado de Puebla, en su artículo 7-II, define el “Avalúo comercial es el documento que contiene el **Dictamen técnico** que estima el precio y valor de un predio a una fecha determinada, conforme a las reglas del mercado inmobiliario y a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables”.*

*Así, consideró que de acuerdo al avalúo comercial solicitado por la notaría 2 (dos) de Tecali, Puebla, a la perita valuadora, el precio y valor del inmueble motivo de la observación, se encontraba en el supuesto de un gasto sobrevaluado por \$2'389,755.00, (dos millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos), para lo cual insertó de nueva cuenta los cuadros comparativos del oficio de errores y omisiones (primera vuelta).*

*Además, señaló que la investigación de mercado presentada en el oficio de errores y omisiones (segunda vuelta), servía como referencia de los precios en inmuebles ubicados en la zona geográfica donde se ubica el inmueble motivo de la observación; y los cuales coinciden con los avalúos exhibidos, siendo estos últimos los determinantes en el concepto de sobrevaluación.*

*En respuesta, el Partido, indicó que si bien la definición a la que hizo referencia la UTF corresponde al avalúo comercial, no hay una ley o artículo que mencione que dicho avalúo obligue a comprar en ese precio, y que el precio real es el pactado entre las partes, como establece el Código Civil para el Estado de Puebla.*

*En ese sentido, indicó que en la compra del inmueble influyeron distintos elementos económicos, como es el alza de la plusvalía inmobiliaria y la inflación, por lo que las partes del contrato fueron las que establecieron ese valor.*



**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

*Así, el PAN señaló las diferencias que a su consideración existen entre el inmueble comprado con cada uno de los comparados para determinar la sobrevaluación determinada por la UTF, precisando las diferencias en los inmuebles comparados relativos a la edad, ubicación, metros cuadrados de superficie y de construcción, de ahí que estimó que los bienes comparados no eran similares o iguales al comprado por el Partido.*

*En el Dictamen se indicó que tomando en cuenta la investigación de mercado de propiedades en venta en San José Mayorazgo, Puebla, Puebla, obtenida mediante las páginas de internet **www.mercadolibre.com.mx**, **www.inmuebles24.com** y **www.propiedades.com** a modo de precios de referencia, de bienes inmuebles que se encuentran en venta, de características parecidas y en la misma zona geográfica que el reportado en la adquisición señalada y los avalúos presentados eran suficientemente adecuados para determinar el costo de sobrevaluación, por lo consideró que la observación no quedó atendida.*

*Por su parte, en la conclusión **1-C2-PB** de la resolución impugnada, se consideró que el PAN reportó egresos de forma sobrevaluada por un importe de \$2'389,755.00 (dos millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos), transgrediendo los artículos 25.1 n) de la Ley de Partidos; así como 25.7, 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización por lo que dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que en derecho correspondiera.*

*Lo **fundado** del agravio radica en que incorrectamente el Consejo General del INE consideró la responsabilidad del PAN atendiendo para la sobrevaluación estimada del bien inmueble, la comparación de otros inmuebles como elementos demostrativos de su valor, obtenidos a través de páginas de internet y un avalúo de 2017 (dos mil diecisiete) que no corresponden a las características (tiempo, dimensiones y ubicación) del inmueble adquirido.*

*En efecto, los artículos 27 y 28 del Reglamento señalan que para la determinación del valor de gastos sobrevaluados, la UTF deberá, entre otras cosas, reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado; señala que la información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate, identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables, y que para ese procedimiento se utilizará el “valor razonable”.*

*Además, disponen que la UTF deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable, utilizando el valor más alto de esa matriz de precios.*

*Así, establecen que para que un gasto sea considerado como sobrevaluado, la UTF debe identificar gastos cuyo valor reportado sea superior en un tercio, en relación con los determinados a través del criterio de valuación y cuando menos identificando la fecha de contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación y la ubicación geográfica.*

*De esta manera, del análisis de las acciones realizadas por la UTF para determinar la sobrevaluación del inmueble adquirido por el PAN, no es posible advertir que hubiera realizado dicho análisis y, en caso de ser necesario, obtenido la información para el comparativo respectivo de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.*

*Tampoco se advierte que hubiera identificado de manera adecuada los atributos de los bienes sujetos de valuación y sus componentes comparables, para obtener el valor razonable.*

*De igual manera, **no es posible advertir que la UTF hubiera elaborado una matriz de precios, con información homogénea y comparable**; esto es, **debió establecer de acuerdo al comparativo sobre bienes inmuebles similares o que contaran con las mismas características, cuáles eran sus valores de mercado, es decir, el valor del metro cuadrado de la superficie del terreno y de los metros cuadrados de construcción, como matriz de precio.***

*En ese sentido, la UTF debió identificar el gasto cuyo valor reportado era superior en un tercio, en relación con los determinados a través del criterio de valuación y para ello, cuando menos, debió identificar la fecha de contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, **las características específicas de los bienes o servicios**, el volumen de la operación y la ubicación geográfica.*

*Tomando en cuenta lo anterior, es necesario establecer que la plusvalía que tienen los bienes inmuebles cambia por el solo paso del tiempo y se ajusta de acuerdo a las condiciones de mercado atendiendo a las características extrínsecas al inmueble<sup>5</sup>.*

---

<sup>5</sup> Según la definición establecida por la Real Academia Española, consultable [dle.rae.es/plusvalía](http://dle.rae.es/plusvalía), la cual se cita como hecho notorio en términos del artículo 15.1 de la Ley de Medios.

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

*Además, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de conformidad con el artículo 16.1 de la Ley de Medios, tratándose del valor de los inmuebles deben considerarse sus características propias como la ubicación, superficie, metros construidos, condición, antigüedad, mejoras, análisis de mercado, etcétera, que son los elementos, entre otros, que definen su costo en el mercado.*

*Por ello, la autoridad fiscalizadora debió analizar si, en el caso, el precio del bien inmueble estaba justificado con base en la referida plusvalía, o no, para lo cual, como se señaló, podría allegarse de mayores elementos y analizarlos de tal manera que se evidencie un estudio comparativo con inmuebles de características similares al inmueble adquirido por el PAN a fin de llegar a la convicción respecto a si existe o no, el presunto sobreprecio observado por el Consejo General del INE.*

*Además, el avalúo de 2017 (dos mil diecisiete) utilizado como comparativo para determinar la sobrevaluación del precio del inmueble adquirido por el Partido, tampoco podría ser el único elemento a considerar, toda vez que el valor comercial del inmueble puede cambiar por la plusvalía y las mejoras propias del inmueble que hubiera tenido -de ser el caso- hasta la fecha de adquisición, esto es, de 2 (dos) años después, valor que se vio reflejado en el avalúo de ese año.*

*Por lo que, en ese caso, también era necesario que analizara si era razonable que en ese tiempo aumentara su valor comercial en esa magnitud.*

*En ese sentido, la UTF para determinar la sobrevaluación del inmueble debió realizar un comparativo con elementos actualizados, de otros bienes inmuebles similares por sus características.*

*Aunado a ello, el artículo 35 del Reglamento de Fiscalización dispone que el sistema reconocerá la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los sujetos obligados con terceras personas respecto de derechos y obligaciones, en términos de las disposiciones civiles y mercantiles vigentes, con la aplicación de las NIF (norma de información financiera).*

*Por su parte, el artículo 71.2 del Reglamento de Fiscalización indica que los activos fijos se deberán evaluar, entre otros, con las valuaciones a valor razonable que deberán cumplir con lo establecido en la NIF (norma de información financiera) A-6 "Reconocimiento y valuación".*

*Esa norma dispone que para determinar el valor de uso, la entidad contable debe utilizar **modelos técnicos** de valuación reconocidos en el ámbito financiero y **contar con sustento suficiente, confiable y comprobable** para las estimaciones que utilice sobre el valor específico de un activo.*

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

*Con base, en lo anterior, lo procedente es revocar la conclusión en estudio para los efectos precisados en seguida, y dejar sin efectos la vista que ordenó el Consejo General a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.*

**SEXTA. Efectos.** *Al haber resultado sustancialmente fundados los agravios del PAN relativos a las conclusiones 1-C10-CM y 1-C2-PB, lo procedente revocar la Resolución impugnada, para los siguientes efectos:*

...

*b) Respecto a la conclusión **1-C10-CM**, el INE deberá reponer el procedimiento respectivo, para que, otorgando la garantía de audiencia correspondiente al PAN, emita una nueva resolución en que, de ser el caso, la conducta observada, sea congruente con la sanción impuesta.*

*c) Respecto a la conclusión **1-C1-PB**, el INE deberá reponer el procedimiento de acuerdo a los artículos 27 y 28 del Reglamento, en los términos indicados en esta sentencia.*

*Para ello, deberá otorgar la garantía de audiencia correspondiente al PAN. Hecho lo anterior, el Consejo General deberá emitir una nueva resolución en que de manera fundada y motivada determine si el gasto reportado por el PAN estuvo sobrevaluado y en su caso, establezca la sanción que corresponda.*

*(...)"*

**4. Capacidad económica.** De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional sujeto al procedimiento de fiscalización cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo **IECM/ACU-CG-005/2021**, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, el monto siguiente:

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2021
Partido Acción Nacional	\$70,095,004.20

De igual forma mediante el Acuerdo **CG/AC-50/2020**, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Puebla, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, el monto siguiente:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2021
Partido Acción Nacional	\$48,228,297.33

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, de conformidad con la información remitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Electoral del estado de Puebla, obran los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Acción Nacional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Entidad	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas a abril de 2021	Saldo Pendiente
Ciudad de México	Partido Acción Nacional	-	-	-	-
Puebla		INE/CG644/2020	\$844.90 Multa	\$844.90	\$0.00
			\$1,206,657.75	\$1,206,657.75	\$0.00
			\$33,000.03	\$33,000.03	\$0.00

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político, cuenta con la capacidad económica suficiente con la cual puede hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en el presente Acuerdo.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Jurisprudencia 10/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA's) vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a \$84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló el ejercicio sujeto a fiscalización.

5. Que de la lectura de la resolución **SCM-RAP-8/2021**, se advierte que la Sala Ciudad de México determinó, respecto de la conclusión **1-C10-CM**, que lo procedente era revocar la sanción impuesta a efecto de que la autoridad responsable realizara la reposición del procedimiento en donde se otorgue la garantía de audiencia correspondiente al Partido Acción Nacional y se emita una nueva resolución en que, de ser el caso, la conducta observada, sea congruente con la sanción impuesta, asimismo, respecto a la conclusión **1-C2-PB** se ordenó la reposición del procedimiento de acuerdo a los artículos 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización, donde se otorgue la garantía de audiencia correspondiente, y se emita una nueva resolución en la que de manera fundada y motivada se determine si el gasto reportado por el sujeto obligado, estuvo sobrevaluado y en su caso, se establezca la sanción que corresponda.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

**6.** Para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Ciudad de México en el SCM-RAP-8-2021, esta autoridad electoral procedió a acatar en los términos ordenados en la referida sentencia, de acuerdo a lo siguiente:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
<p><b>ÚNICO. Revocar parcialmente</b> la resolución impugnada, para los efectos precisados en la última de las razones y fundamentos de esta sentencia.</p>	<p>Respecto a la conclusión <b>1-C10-CM</b>, el INE deberá reponer el procedimiento respectivo, para que, otorgando la garantía de audiencia correspondiente al PAN, emita una nueva resolución en que, de ser el caso, la conducta observada, sea congruente con la sanción impuesta.</p> <p>Respecto a la conclusión <b>1-C1-PB</b>, el INE deberá reponer el procedimiento de acuerdo a los artículos 27 y 28 del Reglamento, en los términos indicados en esta sentencia.</p> <p>Para ello, deberá otorgar la garantía de audiencia correspondiente al PAN. Hecho lo anterior, el Consejo General deberá emitir una nueva resolución en que de manera fundada y motivada determine si el gasto reportado por el PAN estuvo sobrevaluado y en su caso, establezca la sanción que corresponda.</p>	<p>En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, al resolver el recurso de apelación SCM-RAP-8-2021,</p> <p>Respecto a la conclusión <b>1-C10-CM</b> se realizó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La autoridad electoral emitió oficio a efecto de otorgar la garantía de audiencia al Partido Acción Nacional, es así del análisis y verificación a la documentación proporcionada, se constató que el sujeto obligado presentó un escrito dirigido a la Lic. Dania Ibett Puga Corona, Tesorera del Comité Regional de Partido Acción Nacional en el estado de Colima de fecha 28 de septiembre de 2020, solicitándole la realización de las gestiones necesarias para llevar a cabo la notificación del escrito TESOREG/EXT/184Bis/20 dirigido a la persona moral "Elandra, S.A. de C.V.", en el cual se le solicita al proveedor señalar los motivos por los cuales el cheque señalado a la fecha no han sido cobrados.</li> <li>- En respuesta, en el mismo escrito TESOREG/EXT/184Bis/20, tiene la leyenda <i>"la empresa no fue localizada en dicho domicilio"</i>.</li> <li>- Derivado de lo anterior, el partido no presentó documentación que comprobara las gestiones necesarias para que el proveedor realizara el cobro del cheque, esto es, no existen elementos que permitan tener certeza de que el personal del partido se presentó en el domicilio del proveedor, correos electrónicos o algún elemento que permita tener por cierta la acción del partido.</li> </ul> <p>Respecto a la conclusión <b>1-C2-PB</b> se realizó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se obtuvo el precio por metro cuadrado del inmueble reportado por el PAN Puebla, que incurrió en sobrevaluación. Ese precio resultó en \$16,049.38 (dieciséis mil cuarenta y nueve pesos 38/100 M.N.)</li> </ul>

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Sentencia	Efectos	Acatamiento									
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se construyó una matriz de precios con información homogénea y comparable. Por lo que se recabaron los datos de cotizaciones de inmuebles de características similares.</li> <li>- Dicho precio se comparó con el valor razonable del criterio de valuación que es de \$9,014.67 (nueve mil catorce pesos 67/100 M.N.)</li> <li>- Una quinta parte del valor razonable (\$9,014.67 entre 5) es \$1,802.93 pesos, por lo que una sobrevaluación respecto al criterio de valuación ocurrirá en el caso de que el precio del inmueble resulte por metro cuadrado, superior a la suma de \$9,014.67 más \$1,802.93 (el criterio de valuación más un quinto), es decir, \$10,817.60 (diez mil ochocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.).</li> <li>- Como se observó, el precio por metro cuadrado pagado por el PAN Puebla fue de \$16,049.38 pesos.</li> <li>- Cabe precisar que \$16,049.38 pesos representan sobre \$9,014.67 pesos el 178.04%, es decir, excede la quinta parte (20.00%) del valor razonable definido por el criterio de valuación.</li> <li>- Por lo anterior, se concluye que el sujeto obligado pagó \$5,200,000.00 pesos por la adquisición de un inmueble de 324 m2 con un costo de \$16,049.38 pesos por m2. Ahora bien, dado que el precio promedio determinado por esta autoridad fue de \$9,014.67 pesos por metro cuadrado, se concluye que el valor razonable del inmueble debió ascender, máximo a \$2,920,753.08 pesos.</li> </ul> <p>Ahora bien, en relación a los argumentos vertidos en el SCM-RAP-8/2021, se modificaron las siguientes conclusiones en el tenor siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conclusión</th><th>Dictamen Consolidado INE/CG643/2021</th><th>SCM-RAP-8-2021</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-C10-CM</td><td>\$16,820.00</td><td>\$16,820.00</td></tr> <tr> <td>1-C2-PB</td><td>\$2,389,755.00</td><td>\$2,920,753.08</td></tr> </tbody> </table>	Conclusión	Dictamen Consolidado INE/CG643/2021	SCM-RAP-8-2021	1-C10-CM	\$16,820.00	\$16,820.00	1-C2-PB	\$2,389,755.00	\$2,920,753.08
Conclusión	Dictamen Consolidado INE/CG643/2021	SCM-RAP-8-2021									
1-C10-CM	\$16,820.00	\$16,820.00									
1-C2-PB	\$2,389,755.00	\$2,920,753.08									

**7.** La Sala Ciudad de México determinó revocar el Dictamen INE/CG643/2020 y la Resolución INE/CG644/2020, en lo tocante a las conclusiones **1-C10-CM** y **1-C2-PB** para que se reponga el procedimiento respectivo, se dé garantía de audiencia al Partido Acción Nacional y se emita una nueva resolución. En este sentido, este Consejo General procede a realizar la modificación al Dictamen INE/CG643/2020, en los siguientes términos:



**DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM-RAP-8/2021, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO, DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.**

El 3 de marzo de 2021, la Sala Ciudad de México resolvió el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SCM-RAP-8/2021, determinando revocar lo concerniente a las conclusiones 1-C10-CM y 1-C2-PB, correspondientes a la Ciudad de México y al estado de Puebla, respectivamente, del Dictamen consolidado y Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, correspondiente al ejercicio ordinario 2019, del Partido Acción Nacional, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG644/2020, a efecto de que la responsable emita una nueva determinación en base a la garantía de audiencia que se otorgue al sujeto obligado.

Al respecto, la autoridad electoral emitió oficios a efectos de otorgar la garantía de audiencia al Partido Acción Nacional, derivado del análisis se determinó la siguiente:

**1. Partido Acción Nacional/CM**

**Observación**

**Oficio Núm. INE/UTF/DA/14663/2021**

**Fecha de notificación: 7 de abril de 2021**

***Cuentas de Balance***

***Bancos***

1. De la revisión a las conciliaciones bancarias, se detectaron partidas en conciliación que al 31 de diciembre de 2019 presentan la antigüedad mayor a un año, como se detalla en el cuadro siguiente:

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Institución Financiera	Cuenta	Datos del cheque				Referencia Oficio 1ª vuelta	Referencia oficio 2ª vuelta
		Número	Fecha	Beneficiario/Concepto	Importe		
Banco Nacional de México, S.A.	4113742	Ch 2642	07-12-17	Elandra S.A. de C.V. Miguel Hidalgo	\$16,820.00	2	3
	5238979	Ch. 4750	07-03-17	Omar Lozano Torres	3,000.00	2	2
		Ch. 4872	24-04-17	Grupo Imev S.A de C.V.	1,000.00	1	1
Total					\$20,820.00		

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/9578/2020, notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Con escrito de respuesta: número TESOREG/EXT/1852020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

*Con fundamento en el artículo 55 del RF y con base en la observación asentada en el numeral 38 del oficio referenciado, se adjunta en el SIF la documentación que justifica las gestiones efectuadas para su regularización.*

*Para soportar lo anterior, se adjunta al final del presente documento el ANEXO 17*

*Por lo anteriormente expuesto, y toda vez, que se presenta en el Sistema Integral de Fiscalización la documentación señalada bajo el fundamento legal expresado; se solicita a esta H. Autoridad considerar la presente observación debidamente atendida y, por lo tanto, subsanada. Por lo cual, lo conducente será NO establecer sanción legal alguna, al NO infringirse conducta legal.*

De la verificación a la documentación y del análisis a la respuesta proporcionada en el SIF se observó lo siguiente:

Respecto el cheque señalado con (1) en la columna “Referencia” en el cuadro que antecede, el sujeto obligado manifestó que el cheque fue expedido por la cantidad \$25,450.80, sin embargo, la institución financiera hizo el cobro por la cantidad de \$24,450.80; situación por la cual, el monto observado se encuentra como partida en conciliación, con la institución financiera; por tal razón, por lo que se refiere a este punto, la observación quedó atendida.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Respecto los cheques señalados con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, el sujeto obligado manifestó que se expidieron los cheques señalados con el propósito de cumplir con las obligaciones pactadas con el prestadores de servicios señalados, sin embargo, desconocen el motivo por el cual a la fecha de elaboración del presente oficio de errores y omisiones hayan realizado el cobro de los mismos; cabe señalar que de la verificación a la documentación presentada, se observó que el sujeto obligado omitió presentar la documentación que justifique las gestiones efectuadas para su cobro.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10544/2020, notificado el 23 de octubre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Con escrito de respuesta: número TESOREG/EXT/191/2020 de fecha 30 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

*“PRIMERO.- Respecto el cheque señalado con (1) en la columna “Referencia” en el cuadro referenciado, el sujeto obligado manifestó que el cheque fue expedido por la cantidad \$25,450.80, sin embargo, la institución financiera hizo el cobro por la cantidad de \$24,450.80; situación por la cual, el monto observado se encuentra como partida en conciliación, con la institución financiera; por tal razón la UTF dio por atendido todo lo relativo a esta punto.*

*SEGUNDO.- Respecto los cheques señalados con (2) en la columna “Referencia” del cuadro referenciado, este sujeto obligado manifestó que se expidieron los cheques señalados con el propósito de cumplir con las obligaciones pactadas con el prestadores de servicios señalados, sin embargo, desconocen el motivo por el cual a la fecha de elaboración del presente oficio de errores y omisiones hayan realizado el cobro de los mismos; la UTF determinó que el sujeto obligado omitió presentar la documentación que justifique las gestiones efectuadas para su cobro.*

*Se presenta en el SIF oficio dirigido al C. Omar Lozano Torres, respecto de la gestión correspondiente para la regularización del saldo.*

*Para soportar lo anterior, se adjunta el archivo CDMX OBS 12 OFICIO OMAR LOZANO TORRES en el sistema SIF:*

*ID de Contabilidad: 00505  
Módulo: Ordinario, Informes, Anual  
Apartado: Documentación Adjunta al Informe*

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

*Tipo: Anual 2019*  
*Etapa: Segunda Corrección*  
*Clasificación Otros Adjuntos*  
*Oficio: INE/UTF/DA/10544/2020*  
*Observación: 12*

*Por lo anteriormente expuesto, y toda vez, que se presenta en el SIF la documentación señalada bajo el fundamento legal expresado y la motivación argumental que se detalla en el cuerpo del presente escrito; se solicita a esta H. Autoridad considerar la presente observación debidamente atendida y, por lo tanto, subsanada. Por lo cual, lo conducente será NO establecer sanción legal alguna, al NO infringir conducta legal.”*

Respecto el cheque señalado con (2) en la columna “Referencia oficio 2ª vuelta” en el cuadro que antecede, se constató que el sujeto obligado presentó el oficio dirigido al beneficiario del cheque por un monto de \$3,000.00 mediante el cual le solicita manifieste del porqué no ha cobrado el cheque en comento, por lo cual al presentar la documentación de las gestiones efectuadas para la regularización de la partida en conciliación; por lo que se refiere a este punto, la observación quedó atendida.

Respecto al cheque señalado con (3) en la columna “Referencia oficio 2ª vuelta” del cuadro que antecede, se observó que el sujeto obligado omitió presentar la documentación que justifique las gestiones efectuadas para el cobro del cheque emitido con fecha del 07-12-17 por un monto de \$16,820.00, con antigüedad mayor a un año.

Cabe señalar que la omisión de comprobar las partidas en conciliación con antigüedad mayor a un año, esto es, cheques que en el ejercicio sujeto a revisión o en ejercicio posterior no se hayan cobrado por el beneficiario, así como no realizar las diligencias pertinentes para su regularización, no se acredita el cumplimiento del pago de pasivos atentando a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 84 del Reglamento de Fiscalización, que refiere lo siguiente:

***“Del reconocimiento de las cuentas por pagar***

*1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o a la conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán ser sancionados conforme lo siguiente:*

*a) Si son saldos originados durante la operación ordinaria, se contabilizarán como ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como aportación de origen prohibido a favor del partido.*

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

(...).

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SCM-RAP-8/2021, se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

La documentación que justifique las gestiones efectuadas para la regularización del importe de \$16,820.00, el cual al 31 de diciembre de 2019 cuenta con antigüedad mayor a un año.

Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la LGPP y 55 del RF, en relación con en relación con el artículo 84 del mismo ordenamiento.

***Escrito de respuesta: Sin número***

***Fecha del escrito: 12 de abril de 2021***

“(...)

*Se hace del conocimiento de la autoridad las siguientes aclaraciones:*

*1. Con fundamento en el artículo 55 del RF y con base en la observación asentada en el numeral 1 del oficio referenciado, este Partido Político realiza la siguiente aclaración:*

*PRIMERA: Respecto al cheque señalado con número de cuenta 4113742 del cuadro referenciado, este sujeto obligado expidió el cheque correspondiente con el propósito de cumplir con las obligaciones pactadas con el prestador de servicios, sin embargo, desconoce el motivo por el cual no haya realizado el cobro del mismo; la UTF determinó que el sujeto obligado omitió presentar la documentación que justifique las gestiones efectuadas para su cobro.*

*Por lo anterior este partido procedió a solicitar apoyo a la C. Dania Puga en su carácter de Tesorera del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en la entidad de Colima para la localización de la persona moral denominada “Elandra S.A. de C.V.”.*

*Por consiguiente, se dirigió mediante oficio TESOREG/EXTX184BIS/20 el aviso correspondiente a la persona moral antes citada, para solicitar la aclaración que esta H. autoridad señaló, sin embargo a la fecha de contestación del “Oficio de*

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

*Errores y Omisiones derivados de la revisión del Informe Anual 2019 en la Ciudad de México. Partido Acción Nacional. SEGUNDA VUELTA” no se contaba con la información correspondiente para manifestar respuesta precisa alguna.*

*Una vez realizada la búsqueda por medio de la colaboración con la C. Dania Puga, Tesorera Regional de Colima, manifestó no haber encontrado a la persona moral en el domicilio legal que refiere, mismo que se acredita con ANEXO ÚNICO que consta en:*

*1.- Carta de solicitud recibida por la C. Dania Ibett Puga Corona, Tesorera del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en la entidad de Colima.*

*2.- Oficio de notificación a “ELANDRA S.A. DE C.V.”*

*Por último y toda vez que no se cuenta con registro de la misma y que se desconoce el procedimiento para demostrar su existencia o inexistencia, así como su domicilio legal vigente, este sujeto se encuentra imposibilitado para realizar la notificación correspondiente.”*

## **Análisis**

### **No atendida**

Del análisis y verificación de la documentación proporcionada, se constató que el sujeto obligado presentó un escrito dirigido a la Lic. Dania Ibett Puga Corona, Tesorera del Comité Regional de Partido Acción Nacional en el estado de Colima de fecha 28 de septiembre de 2020, solicitándole la realización de las gestiones necesarias para llevar a cabo la notificación del escrito TESOREG/EXT/184Bis/20 dirigido a la persona moral “Elandra, S.A. de C.V.”, en el cual se le solicita al proveedor señalar los motivos por los cuales el cheque señalado con (3) en la columna “Referencia oficio 2ª vuelta” a la fecha no han sido cobrados.

En respuesta, el mismo escrito TESOREG/EXT/184Bis/20 tiene la leyenda “*la empresa no fue localizada en dicho domicilio*”.

Derivado de lo anterior, el partido no presentó documentación que comprobara las gestiones necesarias para que el proveedor realizara el cobro del cheque, esto es, no existen elementos que permitan tener certeza de que el personal del partido se presentó en el domicilio del proveedor, correos electrónicos o algún elemento que permita tener por cierta la acción del partido.

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Asimismo, el cheque expedido por el partido tiene antigüedad mayor a un año, como se indica a continuación:

Número	Fecha	Beneficiario/Concepto	Importe
Ch 2642	07-12-17	Elandra S.A. de C.V.	\$16,820.00

Para tales efectos, la omisión de comprobar las partidas en conciliación con antigüedad mayor a un año, esto es, cheques que no se hayan cobrado por el beneficiario, así como no realizar las diligencias pertinentes para su regularización, no se acreditó el cumplimiento del pago de pasivos atendiendo a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 84 del Reglamento de Fiscalización; razón por la cual, **la observación no quedó atendida.**

## **Conclusión**

### **1-C10-CM**

El sujeto obligado presentó un cheque en conciliación bancaria con antigüedad mayor a un año, por un importe de **\$16,820.00.**

Al tratarse de operaciones con persona moral y no acreditarse el pago del pasivo, se considera como aportación de origen prohibido a favor del partido.

## **Falta Concreta**

Aportación de origen prohibido a favor del partido

## **Artículo que incumplió**

25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la LGPP, en relación con el artículo 84 del RF.

**DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES RELATIVO AL INFORME ANUAL ORDINARIO 2019 EN EL ESTADO DE PUEBLA DERIVADO DE LA SENTENCIA SCM-RAP-8/2021.**

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

**1. Partido Acción Nacional/PB**

Del análisis a la documentación presentada en el SIF, se observó una operación por la adquisición de bienes, que se encuentra en el supuesto de un gasto sobrevaluado, toda vez que se localizaron precios a un costo menor al reportado. Como se detalla en el cuadro siguiente:

Referencia contable	Concepto	Importe	Valuación presentada	Diferencia	Porcentaje de diferencia
EGR 74-032020	REGISTRO DE ADQUISICION DE INMUEBLE PARA COMITE MUNICIPAL DE PUEBLA	\$5,200,000.00	\$2,810,245.00	\$ 2,389,755.00	85.04%

Lo anterior, se desprende del análisis comparativo de los avalúos presentados en el expediente de escrituras y operaciones de compraventa, como se indica en el cuadro siguiente:

Fecha de Avalúo	Folio del avalúo	Perito Valuador	Avalúo (valor comercial)	Importe de la operación de compraventa	Diferencia entre avalúo y operación	Porcentaje de diferencia
23 de enero de 2017	PCO/174 /2017	M. en V. Patricia Coronado Olea Ced. Prof. 492472 Registro ICEP IC088/2017	\$1,011,551.00	<b>\$1,215,010.00</b>	\$203,459.00	20.11%
11 de marzo de 2019	PCO/285 /2019	M. en V. Patricia Coronado Olea Ced. Prof. 492472 Registro ICEP IC088/2019	\$2,810,245.00	<b>\$5,200,000.00</b>	\$2,389,755.00	85.04%

Además de lo anterior, esta Unidad Técnica de Fiscalización realizó una investigación de mercado sobre propiedades de iguales o similares características al inmueble observado, en la misma zona geográfica, identificando las cotizaciones que se muestran en el Anexo 3.9. del oficio INE/UTF/DA/9974/2020.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante el oficio núm. INE/UTF/DA/9974/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se le hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.



**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Con escrito de respuesta: número CDE-PAN-PUE/TESORERIA/081/2020 sin fecha, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

*“Derivado de la observación emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización, referente a la adquisición del bien inmueble para el Comité Directivo Municipal de Puebla, en la que se realizó la compraventa...”*

Véase Anexo R1, páginas 10 y 11

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, se determinó lo siguiente:

Esta Unidad Técnica de Fiscalización, de acuerdo a lo que establece la Ley de Catastro del Estado de Puebla, en su artículo 7, fracción II, como “Avalúo comercial es el documento que contiene el Dictamen técnico que estima el precio y valor de un predio a una fecha determinada, conforme a las reglas del mercado inmobiliario y a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables”; misma definición adoptada por el Instituto Registral y Catastral de Puebla. Y considerando que de acuerdo al avalúo comercial solicitado por la Notaría No. 2 de Tecali Puebla, a la Perito Valuador, con Cédula Profesional 492472 y Registro ante el Instituto Catastral del Estado de Puebla IC088/2019; el precio y valor del inmueble motivo de la presente observación, se encuentra en el supuesto de un gasto sobrevaluado por \$2,389,755.00, como se muestra en el cuadro siguiente:

Referencia contable	Concepto	Importe	Valuación presentada	Diferencia	Porcentaje de diferencia
EGR 74-032020	REGISTRO DE ADQUISICION DE INMUEBLE PARA COMITE MUNICIPAL DE PUEBLA	\$5,200,000.00	\$2,810,245.00	\$ 2,389,755.00	85.04%

*A continuación, se desglosan las últimas operaciones de compraventa del inmueble señalado, observándose las diferencias entre el valor comercial de los avalúos presentados, y el importe de las operaciones de compraventa correspondientes; los cuales detallan lo desproporcionado de esta última.*

Fecha de Avalúo	Folio del avalúo	Perito Valuador	Avalúo (valor comercial)	Importe de la operación de compraventa	Diferencia entre avalúo y operación	Porcentaje de diferencia
23 de enero de 2017	PCO/174/2017	M. en V. Patricia Coronado Olea Ced. Prof. 492472	\$1,011,551.00	<b>\$1,215,010.00</b>	\$203,459.00	20.11%

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Fecha de Avalúo	Folio del avalúo	Perito Valuador	Avalúo (valor comercial)	Importe de la operación de compraventa	Diferencia entre avalúo y operación	Porcentaje de diferencia
		Registro ICEP IC088/2017				
11 de marzo de 2019	PCO/285/2019	M. en V. Patricia Coronado Olea Ced. Prof. 492472 Registro ICEP IC088/2019	\$2,810,245.00	<b>\$5,200,000.00</b>	\$2,389,755.00	85.04%

*La investigación de mercado presentada en el Anexo 3.9 del presente oficio, sirve como referencia de los precios en inmuebles ubicados en la zona geográfica donde se ubica el inmueble motivo de esta observación; y los cuales coinciden con los avalúos exhibidos, siendo estos últimos los determinantes en el concepto de sobrevaluación señalado.*

*Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente:*

- *Las aclaraciones que a su derecho convenga.*

*Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 del RF.*

## **Respuesta**

*“(...)*

*Derivada a la observación emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización y del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada, referente a la adquisición del bien inmueble para el Comité Directivo Municipal de Puebla, adopta la definición de la Ley de Catastro en su artículo 7, fracción II que a la letra dice:*

*"Avalúo comercial. - El documento que contiene el Dictamen técnico que estima el precio y valor de un predio a una fecha determinada, conforme a las reglas del mercado inmobiliario y a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables".*

*(...)"*

Véase el **ANEXO R2** del presente Dictamen

## **Análisis**

## **No Atendida**

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Del análisis a la respuesta y de la documentación presentada en el SIF, se concluye la existencia de un gasto sobrevaluado, por la compra de un inmueble, el cual se adquirió en un 85.04% por arriba del valor de mercado, según lo determinado en el Avalúo Comercial que ordenó la Notaría Pública No. 02 de Tecali de Herrera, donde se protocolizó la compraventa. Como se detalla en el siguiente cuadro comparativo:

Fecha de Avalúo	Avalúo (valor comercial)	Importe de la operación de compraventa	Diferencia entre avalúo y operación	% de diferencia
23 de enero de 2017	\$1,011,551.00	\$1,215,010.00	\$203,459.00	20.11%
11 de marzo de 2019	\$2,810,245.00	\$5,200,000.00	\$2,389,755.00	85.04%

En el cuadro que antecede queda establecido el criterio de valuación que se formuló para la operación de compraventa en el año 2017, así como la realizada en el año 2019, motivo de la presente observación; cabe hacer mención, que en ambos casos quien elaboró el Dictamen técnico de referencia fue la misma Perito Valuadora.

Asimismo, se adjunta al presente Dictamen el **ANEXO 3.9-PB**, el cual presenta, a modo de precios de referencia, ejemplos de bienes inmuebles que se encuentran en venta, de características parecidas y en la misma zona geográfica que el reportado en la adquisición señalada. Haciéndose énfasis en que los avalúos presentados, son lo suficientemente adecuados para determinar el costo de sobrevaluación.

## **Conclusión**

### **1-C2-PB**

El sujeto obligado reportó egresos de forma sobrevaluada por un importe de \$2,389,755.00

Adicionalmente, se considera que ha lugar a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.

## **Falta concreta**

Sobrevaluación

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

**Artículo que incumplió**

25 numeral 1, inciso n) de la LGPP; así como 25 numeral 7, 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización.

**En acatamiento a lo mandatado por la Sala Ciudad de México en la resolución SCM-RAP-008-2021, en la cual se ordena que se reponga el procedimiento de sobrevaluación de acuerdo a los artículos 27 y 28 del Reglamento, otorgando nuevamente la garantía de audiencia correspondiente al Partido Acción Nacional.**

**Observación**

**Oficio Núm. INE/UTF/DA/14670/2021**

**Fecha de notificación: 08 de abril de 2021**

**Sobrevaluación**

1. Del análisis a la documentación presentada en el SIF, se observó una operación por la adquisición de un bien inmueble, que se encuentra en el supuesto de un gasto sobrevaluado, toda vez que se localizaron precios a un costo menor al reportado, la póliza en comento se detalla en el cuadro siguiente:

<i>Referencia contable</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe del bien inmueble pagado por el partido</i>	<i>Importe del bien inmueble determinado por la UTF</i>	<i>Sobrevaluación</i>
PN-EG-74/03-2019	REGISTRO DE ADQUISICION DE INMUEBLE PARA COMITE MUNICIPAL DE PUEBLA	\$5,200,000.00	\$2,920,753.08	\$2,279,246.92

Cabe señalar, que esta autoridad tiene como facultad vigilar que el destino de los recursos se ejerza conforme a la normatividad aplicable y a un valor razonable, de acuerdo a las condiciones de mercado.

Para analizar si se confirma el supuesto de sobrevaluación definido en el Reglamento de Fiscalización se aplicó la siguiente:

**Metodología de Valuación**

Se aplicó lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización vigente, en particular, el artículo 25, numeral 7, referido al concepto de valor, establece a la letra:

**Artículo 25.**

***Del concepto de valor***

*7. Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando para su elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de precios, precios reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o precios obtenidos del Registro Nacional de Proveedores.*

Por su parte, el artículo 27 señala:

**Artículo 27.**

***Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados***

*1. Si de la revisión de las operaciones, Informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente:*

*a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.*

*b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.*

*c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.*

*d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.*

*e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.*

*2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica*

*deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.”*

Asimismo, el artículo 28 especifica en su numeral 1 inciso a) y e) lo siguiente:

**“Artículo 28.**

***Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones.***

1. *Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, se estará a lo siguiente:*
  - a) *Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.*

*(...)*

*e) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de la operación ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto partidista.”*

Adicionalmente, la Norma de Información Financiera A-6, establece los criterios y procedimientos para la valuación de activos, criterios que, en lo general, son coincidentes con los descritos en artículo 27 del Reglamento de Fiscalización ya referido.

Como se observa desde el punto de vista jurídico y técnico, es importante que los gastos se registren a su valor de mercado, porque además de ser acorde con criterios técnicos, permite la correcta determinación y comparación de costos y gastos ejercidos, situaciones que favorecen a la rendición de cuentas, la certeza y la objetividad.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

En el caso específico de la erogación realizada por el Partido Acción Nacional, por concepto de adquisición de un bien inmueble esta autoridad fiscalizadora aplicó los siguientes criterios:

1. Para sustentar la valuación en bases objetivas, en cumplimiento con el artículo 25 numeral 7 del Reglamento, se tomarán precios de referencia de acuerdo a diversas cotizaciones de inmuebles con características similares al bien objeto de la observación.
2. Como mandata el artículo 27, numeral 1 inciso a) del Reglamento, se identificó el tipo del bien motivo de la observación.
3. En atención a lo dispuesto en el artículo 27, numeral 1, inciso b) del Reglamento, las condiciones de uso del inmueble se determinaron en función de su disposición geográfica, que corresponde al territorio de Puebla como entidad federativa, así como del tiempo, el cual corresponde al ejercicio ordinario.
4. Como señala el artículo 27, numeral 1, inciso c) del Reglamento, se reunió, analizó y evaluó información relevante del bien sujeto al análisis de posible sobrevaluación.
5. Para identificar los atributos y allegarse de la información necesaria, como mandata el artículo 27, numeral 1, inciso d) del Reglamento, se obtuvo información de diversas cotizaciones con proveedores que ofrecen bienes similares al valuado. Con el mismo fin, se incorporó al análisis la dimensión del inmueble motivo de este ejercicio de estudio, a fin de generar una unidad de medida comparable, siendo ésta el costo por metro cuadrado.
6. Para determinar el valor razonable señalado en el artículo 27, numeral 1, inciso e) del Reglamento, se tomaron criterios de valor de bienes inmuebles en el mismo espacio geográfico (Puebla).

De esta forma el valor razonable utilizado en este análisis no es una inferencia sino el resultado de información objetiva y verificable y cuya documentación se incluye en el presente oficio, como **Anexo “Investigación de Mercado”**.

7. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 28, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, que mandata construir una matriz de precios con información homogénea y comparable, se realizó lo siguiente:

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

- Se tomaron los datos de cotizaciones de inmuebles de características similares. Las cotizaciones para construir esta matriz se incluyen al final del presente apartado y se adjunta al presente oficio el **Anexo “Matriz de Precios”**

- De cada inmueble se incluyeron las siguientes variables incorporadas a la matriz: número de identificación (columna ID); entidad (Puebla); Proveedor; Concepto (venta de inmueble); Medidas, (que incluye metros cuadrados); Costo más IVA; y Costo por metro cuadrado más IVA.

- La matriz permite comparar la superficie de cada inmueble, así como su costo respectivo. De ambos datos se obtiene un costo por metro cuadrado de cada inmueble. Asimismo, la suma del costo por metro cuadrado de cada inmueble dividida entre el total de inmuebles permite conocer el precio promedio real de los inmuebles.

- El precio promedio que arroja la matriz de precios es de \$9,014.67 (nueve mil catorce pesos 67/100 M.N.) por metro cuadrado. Ese es el valor razonable a partir del cual se procede a fijar el criterio de valuación.

- La matriz referida, se reproduce a continuación:

<i>Matriz de Precios</i>									
<i>ID</i>	<i>Entidad</i>	<i>Partido Político</i>	<i>Fecha factura</i>	<i>Factura</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Medidas</i>	<i>Costo factura+ IVA</i>	<i>Costo por metro cuadrado + IVA</i>
							<i>Metros cuadrados</i>		
1	Puebla	N/A	N/A	N/A	LAMUDI	INMUEBLE (COMPRA)	360	\$2,750,000.00	\$7,638.89
2	Puebla	N/A	N/A	N/A	LAMUDI	INMUEBLE (COMPRA)	375	\$3,300,000.00	\$8,800.00
3	Puebla	N/A	N/A	N/A	PROPIEDADES	INMUEBLE (COMPRA)	321	\$3,100,000.00	\$9,657.32
4	Puebla	N/A	N/A	N/A	PROPIEDADES	INMUEBLE (COMPRA)	350	\$3,492,000.00	\$9,977.14
5	Puebla	N/A	N/A	N/A	BIENES ON LINE	INMUEBLE (COMPRA)	250	\$2,250,000.00	\$9,000.00
<b>Costo promedio por metro cuadrado</b>									<b>\$9,014.67</b>

8. Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 28, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, que señala que para determinar la sobrevaluación se debe comprobar que los gastos a analizar no tengan un valor reportado superior en una quinta parte (1/5 o 20.00%) en relación con los determinados a través del criterio de valuación, se hizo lo siguiente:



- Se obtuvo el precio promedio por metro cuadrado del inmueble reportado por el PAN que pueden incurrir en sobrevaluación. Ese precio resultó de \$16,049.38 (dieciséis mil cuarenta y nueve pesos 38/100 M.N.).
- Dicho precio se comparó con el valor razonable del criterio de valuación que es de \$9,014.67 (nueve mil catorce pesos 67/100 M.N.).
- Un quinto del valor razonable (\$9,014.67 entre 5) es \$1,802.93 pesos, por lo que una sobrevaluación respecto al criterio de valuación ocurrirá en el caso en que el precio del inmueble resulte por metro cuadrado superior a la suma de \$9,014.67 más \$1,802.93 (el criterio de valuación más un quinto), es decir, \$10,817.60 (diez mil ochocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.).
- Como se observó, el precio por metro cuadrado pagado por el PAN fue de \$16,049.38 pesos, que excede el quinto (20.00%) del valor razonable definido por el criterio de valuación.
- La conclusión de este análisis es que el inmueble adquirido por el Partido Acción Nacional incurre en el supuesto de sobrevaluación.

9. A continuación, y en el ánimo de cumplir con la exhaustividad en el análisis y la objetividad en la explicación del procedimiento aplicado, se expresa algebraicamente la metodología seguida por la Unidad Técnica de Fiscalización siguiendo lo dispuesto en los artículos 27 y 28 para analizar casos de posible subvaluación.

1. Se obtiene el precio promedio  $\hat{P}$  para evaluar  $\frac{\text{sub}}{\text{sobre}}$  valuación:

$$\hat{P} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Precio unitario de bienes o servicios en la matriz}}{n}$$

Dónde  $n$ : Número de precios de los bienes incluidos en la matriz por la UTF.

2. Se realiza la comparación de  $\hat{P}$  con el precio promedio del partido  $P_{\text{partido}}$ :

$$\hat{S} = \frac{\hat{P} - P_{\text{partido}}}{P_{\text{partido}}}$$

Dónde  $\hat{S}$  es la diferencia del precio del partido respecto al precio promedio de la matriz, o coeficiente de  $\frac{\text{sub}}{\text{sobre}}$  valuación.

3. Se determina la  $\frac{\text{sub}}{\text{sobre}}$  valuación de acuerdo a lo siguiente:

- a) si  $\hat{S} > +\frac{1}{5}$  existe subvaluación
- b) si  $\hat{S} > -\frac{1}{5}$  existe sobrevaluación

10. Sustituyendo en las fórmulas por los valores involucrados en este caso concreto se tiene que:

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

1. Se obtiene el precio promedio para evaluar  $\frac{\text{sub}}{\text{sobre}}$  valuación:

$$\hat{P} = \frac{5,200,000}{324} = \$16,049.38$$

2. Se realiza la comparación de  $\hat{P}$  con el precio promedio del partido  $P_{\text{partido}}$ :

$$\hat{S} = \frac{\hat{P} - P_{\text{partido}}}{P_{\text{partido}}} = \frac{9,014.67 - 16,049.38}{16,049.38} = -0.43$$

3. Se determina la  $\frac{\text{sub}}{\text{sobre}}$  valuación de acuerdo a lo siguiente:

$$-0.43 > -\frac{1}{5} \text{ existe sobrevaluación}$$

**Conclusión:**

11. El resultado de la metodología aplicada, indica que existe sobrevaluación en el inmueble adquirido pues el precio promedio pagado por el Partido Acción Nacional es superior en una quinta parte al precio promedio calculado con 5 inmuebles.

12. El Partido Acción Nacional pagó \$5,200,000.00 pesos por la adquisición de un inmueble de 324 metros cuadrados con un costo promedio calculado de forma individual de \$16,049.38 pesos por metro cuadrado. Ahora bien, dado que el precio promedio real determinado por esta autoridad fue de \$9,014.67 pesos, se concluye que el valor razonable del inmueble debió ascender a \$2,920,753.08 pesos. Es decir, se presenta una sobrevaluación en el costo de adquisición del inmueble por un monto de \$2,279,246.92 pesos (dos millones doscientos setenta y nueve doscientos cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.).

Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente:

Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 del RF.

**Respuesta**

**Fecha del escrito: No presento escrito de Respuesta**

Sin escrito de respuesta por parte del sujeto obligado.

**Análisis**

**No Atendida**

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Es necesario precisar, que en el Oficio de Errores y Omisiones se le señalo al sujeto obligado que el día 13 de abril de 2021, se realizaría la reunión de confronta a través de la plataforma Teams, otorgándole el derecho de audiencia que establece el artículo 295 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, sin embargo, no se acreditó por parte del sujeto obligado a ningún representante para que acudiera a la misma.

Del procedimiento de sobrevaluación realizado, se concluye la existencia de un gasto sobrevaluado por la compra de un inmueble, el cual se adquirió en un precio por arriba del valor de mercado, según lo determinado por la Unidad Técnica de Fiscalización.

Cabe señalar, que el Reglamento de Fiscalización señala que para determinar la sobrevaluación se debe comprobar que los gastos a analizar no tengan un valor reportado superior en una quinta parte (20.00%) en relación con los determinados a través del criterio de valuación, por lo que se realizó el siguiente procedimiento:

- Se obtuvo el precio por metro cuadrado del inmueble reportado por el PAN Puebla, que incurrió en sobrevaluación. Ese precio resultó en \$16,049.38 (dieciséis mil cuarenta y nueve pesos 38/100 M.N.)
- Se construyó una matriz de precios con información homogénea y comparable. Por lo que se recabaron los datos de cotizaciones de inmuebles de características similares, **Anexo Investigación de Mercado**, del presente Dictamen.
- Dicho precio se comparó con el valor razonable del criterio de valuación que es de \$9,014.67 (nueve mil catorce pesos 67/100 M.N.) **Anexo Matriz de Precios**
- Una quinta parte del valor razonable (\$9,014.67 entre 5) es \$1,802.93 pesos, por lo que una sobrevaluación respecto al criterio de valuación ocurrirá en el caso de que el precio del inmueble resulte por metro cuadrado, superior a la suma de \$9,014.67 más \$1,802.93 (el criterio de valuación más un quinto), es decir, \$10,817.60 (diez mil ochocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.).
- Como se observó, el precio por metro cuadrado pagado por el PAN Puebla fue de \$16,049.38 pesos.

Cabe precisar que \$16,049.38 pesos representan sobre \$9,014.67 pesos el 178.04%, es decir, excede la quinta parte (20.00%) del valor razonable definido por el criterio de valuación.

Por lo anterior, se concluye que el sujeto obligado pagó \$5,200,000.00 pesos por la adquisición de un inmueble de 324 m<sup>2</sup> con un costo de \$16,049.38 pesos por m<sup>2</sup>.

Ahora bien, dado que el precio promedio determinado por esta autoridad fue de \$9,014.67 pesos por metro cuadrado, se concluye que el valor razonable del inmueble debió ascender, máximo a \$2,920,753.08 pesos.

Es decir, se presenta una sobrevaluación en el costo de adquisición del inmueble por un monto de \$2,279,246.92 pesos (dos millones doscientos setenta y nueve doscientos cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.); por tal razón la observación **no quedó atendida**.

### **Conclusión**

#### **1-C2-PB**

El sujeto obligado reportó egresos de forma sobrevaluada por un importe de \$2,279,246.92.

Adicionalmente, se considera que ha lugar a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.

### **Falta concreta**

Sobrevaluación

### **Artículo que incumplió**

25 numeral 1, inciso n) de la LGPP; así como 25 numeral 7, 27 y 28 del RF.

**8.** Que la Sala Ciudad de México revocó la resolución **INE/CG644/2020**, particularmente el considerando **18.2.5** específicamente en lo relativo al inciso **d)** relativo a la conclusión **1-C10-CM**, así como el considerando **18.2.20**, inciso **c)** relativo a la conclusión **1-C2-PB** para quedar en los términos siguientes:

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE**

(...)

## **18.2 RECURSO LOCAL**

(...)

### **18.2.5 Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México.**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado relativas al Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México del Partido Acción Nacional, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto político son las siguientes:

(...)

**d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1-C10-CM.**

(...)

**d)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 25, numeral 1, inciso i), y 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 55 y 84, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

<b>Conclusión</b>	<b>Monto involucrado</b>
<i>1-C10-CM El sujeto obligado presentó un cheque en conciliación bancaria con antigüedad mayor a un año, por un importe de \$16,820.00.</i>	\$16,820.00
<i>Al tratarse de operaciones con persona moral y no acreditarse el pago del pasivo, se considera como aportación de origen prohibido a favor del partido.</i>	

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso

b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que en cumplimiento a la Resolución dictada en el recurso de apelación SCM-RAP-08/2021, al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado<sup>6</sup>, el cual forma parte de la motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en la observación materia de análisis, se hicieron del conocimiento del mismo mediante el oficio de errores y omisiones referido en el análisis de la conclusión materia de estudio, por lo cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que dentro del término de cinco días hábiles presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión sancionatoria y la normatividad antes señalada se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).**
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

---

<sup>6</sup> En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que "... esta Sala Superior considera que los dictámenes consolidados sobre los ingresos y gastos [...], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

*Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen consolidado [...], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.*

*En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución [...]."*

- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado “*capacidad económica*” de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión)**

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente inciso, la falta corresponde a la **omisión**<sup>7</sup> de girar cheques que al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se reflejaban en la conciliación bancaria, sin que se hayan cobrado en el ejercicio sujeto a revisión o en ejercicio posterior, así como no realizar las diligencias pertinentes para su regularización, por lo que no se acredita el cumplimiento del pago de pasivos atentando a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), y 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 55 y 84, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

### **b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron**

**Modo:** El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, incurrió en la siguiente:

---

<sup>7</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

<b>Conducta Infractora</b>	
<b>Conclusión</b>	<b>Monto involucrado</b>
<i>1-C10-CM El sujeto obligado presentó un cheque en conciliación bancaria con antigüedad mayor a un año, por un importe de \$16,820.00.</i>  <i>Al tratarse de operaciones con persona moral y no acreditarse el pago del pasivo, se considera como aportación de origen prohibido a favor del partido.</i>	\$16,820.00

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2019.

**Lugar:** La irregularidad se cometió en la Ciudad de México.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de la normatividad transgredida.**

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

En la conclusión de mérito, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en artículos 55 y 84, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con los artículos 25, numeral 1, inciso i), y 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> **Ley General de Partidos Políticos.** "Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (...) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así



De una interpretación armónica de los artículos 55 y 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización en relación con los artículos 25, numeral 1, inciso i), y 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, se establece que los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio que carezcan de la documentación soporte, deberán ser sancionados como aportaciones de origen prohibido a favor del partido si dichos saldos se generaron por operaciones celebradas con personas morales. En este sentido, como documentación soporte debe entenderse aquella que permita comprobar el pago del saldo en la cuenta por pagar o, en su caso, la documentación que justifique las gestiones efectuadas para la regularización del saldo en cuestión.

En caso de que el partido no presente la documentación que acredite el pago o la documentación que, a consideración de la autoridad, justifique las gestiones efectuadas para la regularización del saldo en cuentas por pagar originado por operaciones realizadas con personas morales, la normatividad aplicable establece que dicho saldo deberá sancionarse como una aportación de origen prohibido.

En este sentido, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco; al dictar sentencia dentro del expediente identificado con la calve alfanumérica SG-RAP-6/2019, señaló que el hecho de que no se cobren los

---

*como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; (...)"*

*"Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero."*

**Reglamento de Fiscalización.** *"Artículo 55. Saldos en conciliación mayores a un año 1. Los sujetos obligados que en su conciliación bancaria tengan partidas con una antigüedad mayor a un año, deberán realizar una relación detallada del tipo de movimiento en conciliación, fecha, importe, en su caso nombre de la persona a la que fue expedido el cheque en tránsito y en su caso, el detalle del depósito no correspondido y exponer las razones por las cuales esas partidas siguen en conciliación. Asimismo, deberán presentar la documentación que justifique las gestiones efectuadas para su regularización"*

**Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1.** *Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o a la conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán ser sancionados conforme lo siguiente: a) Si son saldos originados durante la operación ordinaria, se contabilizarán como ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como aportación de origen prohibido a favor del partido*

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

cheques respectivos por un tercero, no exime al sujeto obligado de realizar las diligencias pertinentes para su regularización, pues el dinero al no ser cobrado por sus beneficiarios, continua como un saldo a favor en las cuentas del sujeto obligado con lo cual incumpliría con la obligación que le impone la normatividad electoral.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial por tolerar beneficios que se traducen en aportaciones o donativos proveniente de personas no permitidas por la ley se vulnera de manera directa la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos que constituyen, en una interpretación teleológica, los fines a los que propende la norma transgredida. Debido a lo anterior, el infractor de mérito vulneró los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En el caso concreto, de la respuesta formulada por el instituto político, se desprendió la existencia de un cheque que se encontró en conciliación pendiente de cobro en el ejercicio 2019, relacionado con la persona moral Elandra, S.A. de C.V., respecto del cual el sujeto obligado no presentó documentación alguna que permitiera acreditar el cumplimiento de la obligación de pago frente a terceros ni presentó la documentación que justificara las gestiones efectuadas para su regularización.

Lo anterior es así, ya que no ofreció documentación comprobatoria del cobro del cheque, y si bien presentó documentación que con la que pretendió acreditar las gestiones efectuadas para la regularización del saldo, a consideración de esta autoridad, dichas documentales<sup>9</sup> no generan certeza de que dichas gestiones fueron realizadas, ya que solo ofrece documentales elaboradas por el propio partido, siendo el caso que en el escrito número TESOREG/EXT/184BIS/20 solo se indica que *“la empresa no fue localizada en dicho domicilio”*, sin embargo, no existen elementos de modo, tiempo y lugar que permitan acreditar que personal del partido se presentó en las oficinas de la persona moral para solicitar el cobro del cheque en conciliación; asimismo, no se tiene certeza de quién fue la persona que escribió la leyenda *“la empresa no fue localizada en dicho domicilio”*, ni la fecha en que esta se realizó ni los elementos mediante los cuales se hubiese cerciorado estar en el domicilio de la persona moral o que permitiesen tener certeza de que en efecto no se haya localizado a la empresa en el domicilio que el partido tenía registrado como de dicha persona moral.

Consecuentemente, la conducta realizada por el sujeto obligado implica que este no reguló dichos pagos, en virtud de no haber justificado con elementos objetivos la

---

<sup>9</sup> Dichas documentales son anexos del dictamen donde se desarrolla la conclusión 1-C10-CM, con los nombres RESPUESTA PAN CDMX.pdf y RESPUESTA PAN CDMX1.pdf

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

permanencia de los cheques en conciliación, sin que se hayan cobrado, así como las diligencias efectuadas para su regularización, por lo que al tratarse de la prestación de servicios y/o bienes que ingresaron al patrimonio del partido político y que no fueron pagados, se traduce en una aportación en especie de entes no permitidos por la ley, representando un beneficio para el sujeto obligado al acreditarse el uso de bienes y/o servicios que no fueron saldados, por lo que es inconcuso que se traduce en unas aportaciones en especie proveniente de un ente prohibido.

Es decir, el partido incumplió con su obligación de pago respecto de cuentas de pasivos que pretendió acreditar con cheques en conciliación o transito que no se cobraron por los prestadores de servicios respectivos; tomando en consideración que el partido no presentó elementos objetivos de prueba que acreditaran la intención de pago, en atención al cumplimiento de la antigüedad mayor a un año de la cuenta, de conformidad con el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.

Es importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de una persona moral.

En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones de una persona moral responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y transparencia en el origen lícito de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención a los artículos mencionados no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante

Consecuente con lo anterior, al no hacer frente a su obligación de pago, el partido obtuvo un beneficio económico que toleró, conducta que se traduce en una aportación de entes prohibidos por la normatividad vulnerando el bien jurídico tutelado por los artículos referidos, consistente en la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la conducta señalada, son garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 55 y 84, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con los artículos 25, numeral 1, inciso i), y 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta cometida.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

**B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado “*capacidad económica*” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

---

la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$16,820.00 (Dieciséis mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>11</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

---

<sup>11</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al **200% (doscientos por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$16,820.00 (Dieciséis mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **\$33,640.00 (Treinta y tres mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)**<sup>12</sup>

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$33,640.00 (Treinta y tres mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

#### **18.2.20 Comité Ejecutivo Estatal de Puebla.**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado relativas al Comité Ejecutivo Estatal de Puebla del Partido Acción Nacional, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto político son las siguientes:

(...)

---

<sup>12</sup> El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.



**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

**c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1-C2-PB.**

(...)

**c)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 25, numeral 7, 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

Conclusión	Monto involucrado
<b>1-C2-PB.</b> <i>El sujeto obligado reportó egresos de forma sobrevaluada por un importe de \$2,279,246.92.</i>	\$2,279,246.92

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado<sup>13</sup>, el cual forma parte de la motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

<sup>13</sup> En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que "... esta Sala Superior considera que los dictámenes consolidados sobre los ingresos y gastos [...], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen consolidado [...], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución [...]."

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado “**capacidad económica**” de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

### **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

#### **a) Tipo de infracción (acción u omisión)**

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que se describe en el cuadro denominado *conducta infractora* localizado en el siguiente

inciso, la falta corresponde a la **acción**<sup>14</sup> del sujeto obligado consistente en reportar egresos de forma sobrevaluada, atentando a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 25 numeral 7; 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización.

**b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron**

**Modo:** El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, incurrió en la siguiente:

Conducta Infractora	
Conclusión	Monto involucrado
<b>1-C2-PB.</b> <i>El sujeto obligado reportó egresos de forma sobrevaluada por un importe de \$2,279,246.92.</i>	\$2,279,246.92

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2019.

**Lugar:** La irregularidad se cometió en el estado de Puebla.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de la normatividad transgredida.**

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales

<sup>14</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por existir el **reporte de gastos por encima a los precios de mercado (sobrevaluación) y, consecuentemente, una erogación sin objeto partidista**, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia y equidad en el uso de los recursos como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 25 numeral 7, 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización.<sup>15</sup>

---

**15 Ley General de Partidos Políticos**

**“Artículo 25.** 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (...) **n)** Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que hayan sido entregados;

**Reglamento de Fiscalización.**

**“Artículo 25.** Del concepto de valor. (...) **7.** Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando para su elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de precios, precios reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o precios obtenidos del Registro Nacional de Proveedores.”

**“Artículo 27** Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio. b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables. e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable. 3. Para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto específico no reportado.”

**“Artículo 28.** Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones. 1. Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, se estará a lo siguiente: a) Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación. b) La Unidad Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación y la ubicación geográfica. c) Si prevalece la sub valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos obligados los diferenciales determinados, así como la información base para la determinación del valor con la que cuente la Unidad Técnica. d) Si derivado de la respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación notificados por la Unidad Técnica, se procederá a su sanción. e) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de la operación ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto partidista. f) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de los informes de precampaña o campaña, además de que el diferencial obtenido de una sub valuación será considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto partidista, los valores determinados deberán ser reconocidos en los informes de precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos independientes, según corresponda. 2. Con base en la información determinada por la Unidad Técnica descrita en el inciso c) del numeral 1, del artículo 27, la Comisión establecerá, con base en la materialidad de las operaciones, las pruebas a realizar y con ello definirá los criterios para la selección de las muestras.”

La normativa electoral indica que **los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente** para los fines por los que fueron entregados; es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional, estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Así, la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias -precampaña y anuales- y de campaña.

En atención a lo anterior, es evidente que la finalidad de la obligación impuesta a los Partidos Políticos Nacionales, de administrar sus gastos con base en criterios de eficiencia, economía, racionalidad, y transparencia, es inhibir conductas ilícitas que tengan por objeto alterar las actividades reales que realizan los institutos políticos, principalmente en lo referente a los criterios que debe seguir al realizar sus erogaciones, los cuales al observarlos generan en la autoridad y por consiguiente en la sociedad, la convicción del adecuado uso de los recursos por los partidos políticos, logrando presumir el apego de éstos a los cauces legales aplicables.

En este sentido, los criterios tomados en cuenta al realizar las erogaciones pertinentes con recursos públicos, los cuales además de realizarse de manera transparente y clara, deben reunir los criterios de eficiencia, economía, racionalidad, para con lo anterior colmar las interrogantes sobre la idoneidad del gasto, logrando crear en la sociedad una efectiva rendición de cuentas, la cual genere en la opinión pública un convencimiento sobre la correcta utilización de recursos. En este sentido, la autoridad se encuentra obligada a verificar el correcto destino de los recursos públicos vigilando que en todo momento los partidos políticos no sobrevalen

costos, es decir, contraten servicios o proveedores con opciones de mercado mayores a las establecidas en el mercado y con ello busquen alcanzar los topes a que se encuentran obligados a cubrir.

Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los institutos políticos tienen la obligación de transparentar la efectiva erogación de los recursos con que cuentan y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado Constitucional Democrático de Derecho.

La rendición de cuentas, es la capacidad de las instituciones para hacer responsables a los sujetos obligados de sus actos y decisiones, implicando lo anterior un derecho social a la rendición de cuentas, consistente en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las distintas entidades públicas que conforma el sistema jurídico mexicano, entidades públicas, que tienen la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.

Es así que la obligación de los institutos políticos de llevar a cabo sus actividades dentro de los cauces legales y particularmente de adoptar los criterios correspondientes en la administración del gasto, implica dos elementos sustanciales del Estado constitucional de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, elementos que generan expectativas en la sociedad sobre la obligación de informar verazmente el gasto realizados por los institutos políticos, contribuyendo así a una democratización del sistema jurídico.

Asimismo, la finalidad de las normas en comento, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Respecto del artículo 25, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización, dispone que se deben tomar en cuenta los criterios de valuación, las cuales se encuentran sustentadas en bases objetivas, tomando para su elaboración el análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de precios, precios reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o precios obtenidos del Registro Nacional de Proveedores.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que si de la revisión a las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad electoral determina gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a las reglas determinadas en dicho precepto normativo, con la finalidad de no establecer un valor sin sustento legal y contable que pudiera tomarse como desproporcionado y nugatorio.

Así, la sobrevaluación, de acuerdo a lo señalado por el artículo 28, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, es aquel gasto cuyo valor reportado es superior en una quinta parte, en relación con el valor determinado mediante la aplicación de los criterios de valuación descritos en la norma referida, la cual debe cumplir con los requisitos de los criterios de valuación dispuestos en los artículo 25, numeral 7 y 27 del Reglamento de Fiscalización, los cuales se refieren a lo siguiente:

- a) La Unidad Técnica de Fiscalización deberá identificar cuando menos la fecha de contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación y la ubicación geográfica.

En ese sentido, la Norma de Información Financiera A-6, establece los criterios y procedimientos para la valuación de activos, criterios que, en lo general, son coincidentes con los descritos en artículo 27 del Reglamento de Fiscalización ya referido.

Como se observa desde el punto de vista jurídico y técnico, es importante que los gastos se registren a su valor de mercado porque, además de ser acorde con criterios técnicos, permite la correcta determinación y comparación de costos y gastos ejercidos durante las precampañas y campañas, situaciones que favorecen a la rendición de cuentas, la certeza y la objetividad, y repercuten en la equidad de la contienda.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Es relevante establecer que, de conformidad con el artículo 28, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, para el caso de aquellos gastos identificados en el marco de la revisión de la **operación ordinaria** como **sobrevaluados**, el diferencial obtenido será considerado como **una erogación sin objeto partidista**; siendo que dicho diferencial deberá ser reconocido en el informe respectivo.

En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado trajo consigo la vulneración a los principios de certeza, transparencia y equidad, y como consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal actuación del sujeto obligado, consistente en una sobrevaluación, se colocó en una situación de ventaja respecto del resto de los actores políticos, así como guiar su actuación por intereses particulares específicos. En razón de ello, el sujeto obligado transgredió el principio mencionado previamente, afectando a la persona jurídica indeterminada, es decir, a los individuos pertenecientes a la sociedad.

Es así que, la norma aludida cobra gran relevancia, pues busca salvaguardar la equidad entre los protagonistas del mismo y evitar que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la legislación comicial, se sitúe en una inaceptable e ilegítima ventaja respecto de sus opositores.

Aunado a lo anterior, la violación al principio de equidad se configura al considerar a los partidos como entes de interés público cuyo fin consiste en promover la participación del pueblo en la vida democrática, situación que implica que los institutos políticos no pueden sujetar su actividad a intereses particulares o privados específicos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, así como 25 numeral 7, 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza, transparencia y equidad en el uso de los recursos.

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.



**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente<sup>16</sup>:

- a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

---

<sup>16</sup> Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la conducta señalada, son garantizar la certeza, transparencia y equidad en el uso de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza, transparencia y equidad en el uso de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos; así como lo establecido en los artículos 25, numeral 7; 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta cometida.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

**B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado *capacidad económica* de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

### **Conclusión 1-C2-PB**

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en razón de que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, en el cual se expuso el incumplimiento de la

---

siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$2,279,246.92 (dos millones doscientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>18</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias

---

<sup>18</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$2,279,246.92 (dos millones doscientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **\$2,279,246.92 (dos millones doscientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,279,246.92 (dos millones doscientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.)**<sup>19</sup>

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Adicionalmente, se considera que ha lugar a dar **vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales** para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda.

**9.** La sanción impuesta al **Partido Acción Nacional** de conformidad con la resolución **INE/CG644/2020**, particularmente por lo que toca a las conclusiones **1-C10-CM** y **1-C2-PB**, queda de la siguiente manera:

---

<sup>19</sup> El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

Sanciones en resolución INE/CG644/2020	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SCM-RAP-8-2020
<p><b>SEXTO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>18.2.5</b> correspondiente al <b>Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México</b>, de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p><b>d) 1</b> falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión: <b>1-C10-CM</b></p> <p>Una reducción del <b>25% (veinticinco por ciento)</b> de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de <b>\$33,640.00 (Treinta y tres mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)</b></p> <p>(...)</p> <p><b>VIGÉSIMO PRIMERO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>18.2.20</b> correspondiente al <b>Comité Ejecutivo Estatal de Puebla</b>, de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p><b>c) 1</b> falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión <b>1-C2-PB</b>.</p> <p>Una reducción del <b>25% (veinticinco por ciento)</b> de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de <b>\$2,389,755.00 (dos millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)</b>.</p> <p>(...)</p>	<p>Respecto a la conclusión <b>1-C10-CM</b> se realizó lo siguiente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La autoridad electoral emitió oficio a efecto de otorgar la garantía de audiencia al Partido Acción Nacional, es así del análisis y verificación a la documentación proporcionada, se constató que el sujeto obligado presentó un escrito dirigido a la Lic. Dania Ibett Puga Corona, Tesorera del Comité Regional de Partido Acción Nacional en el estado de Colima de fecha 28 de septiembre de 2020, solicitándole la realización de las gestiones necesarias para llevar a cabo la notificación del escrito TESOREG/EXT/184Bis/20 dirigido a la persona moral "Elandra, S.A. de C.V.", en el cual se le solicita al proveedor señalar los motivos por los cuales el cheque señalado a la fecha no han sido cobrados.</li> <li>- En respuesta, en el mismo escrito TESOREG/EXT/184Bis/20, tiene la leyenda <i>"la empresa no fue localizada en dicho domicilio"</i>.</li> <li>- Derivado de lo anterior, el partido no presentó documentación que comprobara las gestiones necesarias para que el proveedor realizara el cobro del cheque, esto es, no existen elementos que permitan tener certeza de que el personal del partido se presentó en el domicilio del proveedor, correos electrónicos o algún elemento que permita tener por cierta la acción del partido. Respecto a la conclusión <b>1-C2-PB</b> se realizó lo siguiente:</li> <li>- Se obtuvo el precio por metro cuadrado del inmueble reportado por el PAN Puebla, que incurrió en sobrevaluación. Ese precio resultó en \$16,049.38 (dieciséis mil cuarenta y nueve pesos 38/100 M.N.)</li> <li>- Se construyó una matriz de precios con información homogénea y comparable. Por lo que se recabaron los datos de cotizaciones de inmuebles de características similares.</li> <li>- Dicho precio se comparó con el valor razonable del criterio de valuación que es de \$9,014.67 (nueve mil catorce pesos 67/100 M.N.)</li> </ul>	<p><b>SEXTO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>18.2.5</b> correspondiente al <b>Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México</b>, de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p><b>d) 1</b> falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión: <b>1-C10-CM</b></p> <p>Una reducción del <b>25% (veinticinco por ciento)</b> de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$33,640.00 (Treinta y tres mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)</p> <p>(...)</p> <p><b>VIGÉSIMO PRIMERO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>18.2.20</b> correspondiente al <b>Comité Ejecutivo Estatal de Puebla</b>, de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p><b>c) 1</b> falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión <b>1-C2-PB</b>.</p> <p>Una reducción del <b>25% (veinticinco por ciento)</b> de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de <b>\$2,279,246.92 (dos millones doscientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.)</b></p> <p>(...)</p>

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

**10.** Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los Considerandos **5, 6, 7 y 8** del presente Acuerdo, se modifica el inciso **d)** del Resolutivo **SEXTO**, así como el inciso **c)** del Resolutivo **VIGÉSIMO PRIMERO** de la resolución **INE/CG644/2020**, para quedar en los siguientes términos:

**SEXTO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **18.2.5** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México**, de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:

(...)

**d) 1** falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión: **1-C10-CM**

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$33,640.00 (Treinta y tres mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)**

(...)

**VIGÉSIMO PRIMERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **18.2.20** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal de Puebla**, de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:

(...)

**c) 1** falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **1-C2-PB.**

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,279,246.92 (dos millones doscientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 92/100 M.N)**

(...)

**En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,**



**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

**numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

**A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se modifica la parte conducente del Dictamen y la Resolución **NE/CG644/2020**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el ocho de julio de dos mil diecinueve, en los términos precisados en los Considerandos **6 al 10** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta vía se modifica.

**TERCERO.** Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal con sede en la Ciudad de México, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-08/2021**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

**CUARTO.** Se instruye a los Organismos Públicos Locales en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

**QUINTO.** Hágase del conocimiento al Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como al Instituto Electoral del estado de Puebla, a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en el ámbito local, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas.

Por lo que toca al procedimiento de ejecución de las sanciones impuestas a los partidos políticos, este se realizará de la siguiente forma:

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

- El cobro de las sanciones por concepto de multas se deberá efectuar una vez que la resolución en la que se impone la sanción se encuentre firme, y deberá realizarse en una sola exhibición, con cargo a la siguiente ministración mensual a que tiene derecho el partido político.
- Por cuanto hace al cúmulo de sanciones por concepto de reducción de ministración, el monto mensual que se puede retener en el proceso de ejecución de sanciones económicas que se hayan impuesto al partido político, **no podrá rebasar el equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de lo que este reciba por concepto de prerrogativa mensual.**
- **El cobro de las sanciones se extenderá por el número de meses que sean necesarios para cubrir el monto total de dichas sanciones impuestas al partido político en la resolución de mérito.**

**SEXTO.** Notifíquese electrónicamente al Partido Acción Nacional la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con los respectivos anexos, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

**SÉPTIMO.** Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto remita la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con sus Anexos respectivos a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como al Instituto Electoral del estado de Puebla.

**OCTAVO.** Se ordena a la Secretaría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que dé vista a las autoridades señalada en el presente Acuerdo.

**NOVENO.** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**DÉCIMO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-8/2021**

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de abril de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a las consecuencias de la reducción de la ministración, en los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**